

Prensa Obrera

POR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
28 de mayo
de 2020

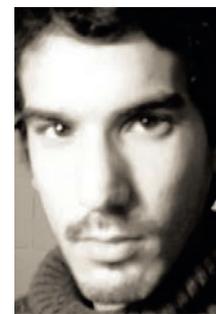
Año XXXVII
N° 1.595

\$40
www.po.org.ar
www.prensaobrera.com
prensaobrera@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial

Pandemia, angustia
y "pacto
de caballeros"
con el macrismo



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA

MEDIA ARGENTINA ES VILLA AZUL

Las terribles imágenes de Villa Azul, en el sur del conurbano, estremecen a todo el país.

En las condiciones de extrema precariedad, el virus encontró un terreno fértil. Ya se cuentan 174 casos entre 800 hogares.

El cerco policial y militar al barrio no ha contribuido en nada a la situación sanitaria de las familias. Los vecinos se encuentran privados de los elementos esenciales. Los alimentos distribuidos son una miseria.

Al igual que en las villas porteñas 31 y 1-11-14, los vecinos de la Azul reclamaron por agua potable y tests frente a los primeros casos, hace semanas. No obtuvieron respuesta entonces. El Estado se hizo "presente" bajo la forma de una ocupación militar.

La tensión en el país no se reduce a la terrible situación que pasan los vecinos de este barrio. Son miles de trabajadores que se miran en ese espejo y saben que están expuestos a lo mismo.

Ya lo viven las villas de la Ciudad de Buenos Aires hace semanas. Y se suman casos en la populosa Villa Itatí, vecina de Azul.

Son casi 1.000 barrios en el conurbano los que comparten las condiciones que permitieron que estalle la bomba viral en Villa Azul.

Frente a la imposibilidad de que cumplan la cuarentena sin movilizar recursos y asistencia, los funcionarios han recomendado allí una "cuarentena comunitaria". Esto ha sido una condena al contagio.

El Polo Obrero viene denunciando que "con hambre no hay cuarentena" y la política de conformación de guetos de pobres.

La apertura de comercios e industrias que Fernández, Larreta y Kicillof le habilitaron a los lobbys empresariales puso en marcha el contagio mediante miles de trabajadores que salen de sus barrios para trabajar.

Los recursos del Estado no han ido a las villas 31 o Azul del país, sino a las arcas de miles de empresas, desde Techint a Clarín o McDonald's. Pagamos a los CEO de monopolios internacionales con fondos de los jubilados. Preparan un nuevo desembolso de millones de dólares a los acreedores internacionales.

Los miles de jubilados que han visto reducidos sus ingresos, los trabajadores despedidos, suspendidos a la baja o que sufren reducciones salariales son víctimas de las prioridades oficiales.

Reclamamos, que se vaya el operativo que cerca Villa Azul y que se garanticen las condiciones sanitarias y alimentarias para los millones de trabajadores bajo el nivel de pobreza.



La escalada de contagios nos plantea nuevos desafíos a los trabajadores

Discutamos una orientación para intervenir

Con la apertura de gran parte de la actividad del país, y de mil industrias en la provincia de Buenos Aires, aún en la deteriorada cuarentena del área metropolitana, la cuestión de los protocolos de protección, los tests masivos y las medidas para garantizarlos están pasando al primer plano.

La reapertura de una planta es un tema enorme para sus trabajadores, porque en ella se juega no sólo el sustento (deteriorado), sino la propia salud del compañero y la de su familia. Lo mismo ocurre en las villas, donde es imposible subsistir sin salir a ganar un mango y donde la cuarentena es poco menos que incumplible por las condiciones de hacinamiento y falta de alimentos, agua potable, cloacas, etc.

En los lugares de trabajo, los protocolos y medidas sanitarias no pueden depender de la voluntad o arbitrio de la patronal porque, a menudo, se retacea la inversión en control de la temperatura, en los costos que trae cambiar los métodos de producción para garantizar el distanciamiento, la división en equipos pequeños para evitar el contacto estrecho masivo, el reordenamiento de comedores, vestuarios y baños, en el licenciamiento de las personas de riesgo por edad y por múltiples patologías, lo que obliga al reemplazo de esos trabajadores en una línea o equipo de producción, en la garantía del transporte de todo el personal, en el pago del combustible en caso de movilidad propia, entre otras cuestiones que van surgiendo.

Ni hablar sobre estos protocolos cuando los llevamos a los centros de salud, donde se plantean otras cuestiones complejas como la separación de áreas de tratamiento según las patologías, el equipamiento extremo del personal que atiende a los contagiados o sospechosos de contagio, y también la formación de equipos diferenciados de médicos, enfermeros y otras profesiones, de manera de reducir al mínimo el contacto es-



trecho en la actividad cotidiana que al momento de un contagio restrinja al mínimo posible la expansión. Obviamente, en la salud, cada vez que va a cuarentena una especialidad se produce un grave vacío de atención a esas patologías, que no dejan de existir aunque haya menos concurrencia a los centros de salud. O el caso de los geriátricos, que constituyen otra realidad diferenciada para el cuidado de la población de más riesgo, que ha ocupado mundialmente la mayor tasa de letalidad. También en los refugios para la gente en situación de calle.

Cuando decimos que no pueden depender del arbitrio patronal es porque en la conducta empresaria prima la maximización del beneficio, la relación entre costos y precios de venta. Una tendencia agravada por la epidemia del Covid 19 y no atenuada, porque ha caído la facturación de todas las actividades, salvo excepciones como algunos sectores de la alimentación. De hecho, la enorme ofensiva empresarial contra la cuarentena expresa que la acumulación capitalista está por encima de la cuestión de la salud o de la vida para la clase social que maneja los resortes de la organización económica, social y, por supuesto política, del país y del Estado.

La tensión sanitaria está atravesada por una tensión de clase entre

el trabajador que necesita la integridad de su salario y la protección de su salud, y las leyes de la acumulación capitalista que rigen la sociedad y la conducta de los dueños de los medios de producción. Esa tensión solo puede alterarse mediante la intervención organizada de los trabajadores, superando su atomización individual, mediante asambleas, mandando definitivamente a los cuerpos sindicales donde los hay, eligiéndolos donde no los hay mediante comisiones electas para abordar estos problemas.

Testeos masivos

En este cuadro es que ha ganado lugar en el debate un tema que nunca dejó de estar presente desde que la pandemia empezó, incluso en el terreno internacional: los tests masivos.

El protocolo escrito hasta ahora indica testeo de aquellos casos que presentan síntomas, solo se han precisado o ampliado los posibles síntomas. Pero con el estallido de los contagios en villas de la Capital y el Gran Buenos Aires se ha pasado al rastillaje casa por casa, siempre para detectar casos (plan Detectar). Ahora, en Villa Itatí se da un paso más en la dirección de tests a los contactos estrechos de los casos detectados. Algo que sostuvimos desde estas páginas y que sigue la ruta del virus. Na-

turalmente, ya se han reclamado tests a todo el personal en cada centro de salud y aún en los supermercados, que suelen tener índices de infectados tan grandes como los hospitales, cuando se ha testado a todos.

La cuestión no se agota allí, sin embargo. Si se logra el testeo de los contactos estrechos del compañero o compañera contagiada, como se ha exigido en distintos conflictos obreros (Papelería del Plata, Ferrocarril Roca, etc.), no es para que los negativos vuelvan a trabajar y abandonen la cuarentena que deben seguir los 14 días indicados. Sino para detectar otros contagios y proteger a su vez los contactos estrechos de los nuevos contagiados detectados. Además, a los siete días hay repetir el testeo de los encuarentenados por el período de evolución del virus, siempre sin interrumpir la cuarentena, porque la única arma de lucha contra el virus es el aislamiento.

Otro tema que surge es quiénes son los contactos estrechos. Pues bien, ya sabemos que aquellos que tuvieron a menos de un metro y medio y más de 10/15 minutos. Pero ¿cuántos días para atrás de contacto estrecho? Al menos 5/7 días, según indican los expertos. Todo esto debe formar parte del debate, fábrica por fábrica. Lo mismo vale en las villas y barrios donde aparecen los casos.

¿Por qué vamos hasta este nivel de detalle? Porque ocurre que la tendencia patronal es a aplicar en los hechos la reforma laboral de flexibilización y superexplotación por la que toda la clase capitalista y el FMI vienen abogando.

Y la cuestión de los costos y el beneficio capitalista, como la reforma laboral de las condiciones de trabajo, van de punta contra una política de protección de la salud. Los kits para el testeo y el trabajo de los laboratorios tienen un costo elevado por ahora (2.200 pesos por test en los laboratorios privados más baratos) y hasta la presunta llegada de otros de menor costo. Pero ahí surge que esos

costos son motivo de disputa entre las patronales, las ART, las obras sociales y el Estado, con el trabajador como conejo de indias.

En resumen, a las falencias en las medidas de Estado para sostener una cuarentena bombardeada por el empresariado y la derecha, a las falencias en la inversión en camas y respiradores, de elementos de protección en la salud, a la necesidad cada hora más imperiosa de un seguro al parado de 30.000 pesos para las 12 millones de personas que lo reclaman, de garantía de la integridad del salario por parte de las patronales (o revisando las cuentas, donde corresponda que el Estado asista), se suma la cuestión de la inversión necesaria, garantizada por el Estado en test masivos siguiendo la ruta del virus, lo cual no garantiza controlarlo, pero sí combatirlo mejor.

La intervención de los trabajadores

Como se aprecia, esto no vendrá de la mano de los shows de militarización de Berni ni de las conferencias profesoras del Presidente, ni de la agitación anticuarentena de la derecha, cuando unos y otros se unen para priorizar la deuda y que no le toquen el bolsillo a las grandes rentas y fortunas.

Vendrá de una intervención de los trabajadores, organizados en cada lugar de trabajo y en cada barrio. Para ello defendemos el derecho de organización, de huelga y de manifestación, que ya están ejerciendo los propios trabajadores, cuidando las medidas de distanciamiento. Al servicio de ese objetivo está toda la elaboración y militancia del Partido Obrero, de nuestras agrupaciones sindicales, del Polo Obrero, de nuestra juventud y de la organización de las mujeres por sus derechos, que el 3J saldrán una vez más a la lucha, marcando la responsabilidad del Estado ante el crecimiento de la violencia contra ellas.

Néstor Pitrola

Más de 500 artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura han emitido un texto de apoyo al proyecto de impuesto a las grandes fortunas del Frente de Izquierda-Unidad, presentado por los diputados Romina Del Plá y Nicolás del Caño.

El texto menciona que “ante una situación extraordinaria es necesario tomar medidas extraordinarias para enfrentar una escalada mayor en la catástrofe social y

Campaña de pronunciamientos en apoyo al impuesto a las grandes fortunas del FIT-U

económica que ya está recayendo con mayor fuerza sobre los trabajadores, sus familias, y los más vulnerables. El mencionado impuesto a las grandes fortunas es parte de un programa de conjunto que necesitamos para hacer fren-

te a la crisis sanitaria, económica y social. Una salida que debe comenzar por el no pago de la deuda fraudulenta y la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, para poner el ahorro nacional y los recursos del país al ser-

vicio de atender la emergencia social y sanitaria. Es decir, una salida integral de la clase trabajadora, la que tendrá lugar con la lucha de los millones de trabajadoras y las grandes mayorías populares”. El texto y las firmas están disponibles

en <https://prensaobrera.com/politicas/70278>

El proyecto del FIT-U es el único presentado hasta ahora. El kirchnerismo sigue limando y dilatando la presentación del propio, para no indisponerse con Wall Street.

Llamamos a impulsar la campaña en apoyo al proyecto del FIT-U en todo el movimiento popular, los trabajadores y la juventud.

Redacción



Pandemia, angustia y “pacto de caballeros” con el macrismo

VANINA BIASI

Las noticias más sonoras de estos días están centradas en el incremento de los contagios en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y su concentración en las barriadas más pobres de ambos distritos. Especialmente en las villas, que no fueron urbanizadas y en las que se concentran condiciones de hacinamiento y falta de servicios. Los barrios de este tipo son 1.800 en el área metropolitana y unos 4.400 en todo el país. Esta es la Argentina que “descubre” Alberto Fernández en su último discurso, consecuencia de décadas de alternancia de gobiernos que se responsabilizan los unos a los otros. Por su parte, la oposición bate el parche de las preocupaciones populares (y no tanto) y el gobierno, negándolas, le regala al macrismo esta curiosa y repentina preocupación por los más pobres y hasta por “los angustiados”.

Villa Azul y la situación social

A pesar de que la Ciudad de Buenos Aires, con el brote ocurrido en las villas 31 y la 1-11-14, anticipó lo que ocurriría en la Villa Azul, esa anticipación no alcanzó para poner en alerta a las intendencias y para que tomaran medidas preventivas. El oficialismo se ufano desde el primer día de su capacidad de previsión, sin embargo, la precocidad de la cuarentena no fue acompañada por los fondos necesarios para atender genuinamente sus efectos y de esa manera defenderla.

Detrás de pasajes de facturas e indirectas del gobernador Kicillof contra Larreta y Vidal, en la conferencia de prensa que prorrogó la cuarentena en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, de los dos lados de la contienda, la inacción completa para asistir a la población más necesitada constituye un punto de encuentro entre ambos sectores. El intento de atribuir el estado de la Villa Itatí exclusivamente al ex intendente macrista Martiniano, derrotado por la camporista Mayra Mendoza en las últimas elecciones, luego de 25 años de gobierno peronista en la provincia y en el distrito, la imputación resulta por lo menos atrevida. Sólo hay que trasladar la misma realidad al partido de La Matanza, que registra un 40% de población sin agua potable, donde el peronismo gobierna desde 1983, para notar que detrás de gobiernos de diferentes signos políticos se desarrollan ataques similares contra los trabajadores, las mujeres y las juventudes de las barriadas más pobres. La Villa Azul y la Itatí, linderas entre sí, o no tienen agua potable o la parte que sí cuenta con redes instaladas, no tiene presión. Los vecinos estuvieron nueve días sin agua. La similitud con la Villa 31 no tiene nada de casual.

Sobre la medida de cerrar un barrio entero, con 3.300 habitantes, que encabe-

zó el ministro Sergio Berni, se dividió incluso el frente interno del gobierno, con declaraciones críticas del Evita, el Frente Darío Santillán y de Barrios de Pie, y apoyos de Alderete, de la CCC, y del MTE de Grabois. Aunque Menéndez, rápidamente relativizó sus dichos. El rejunte “San Cayetano” hace asistencialismo con los pobres que integran sus organizaciones en favor de maniobras políticas para la obtención de puestos en el Estado. Ellas catapultaron al ahora crítico Daniel Menéndez a ocupar un puesto en el Estado, al igual que ocurriera con el espacio de Juan Grabois.

En contraste con esta conducta, el Polo Obrero llevó al plano de la organización de los vecinos, la deliberación en asambleas y, a su turno, la acción callejera, las tremendas carencias que hay en los barrios, y no entregó ninguna reivindicación por puestos en el Estado para tal o cual de sus dirigentes. Como tampoco aceptó integrar el llamado Comité de Crisis, un organismo de regimentación. Las medidas militaristas asumidas por el espacio camporista suplen la ausencia de testeos adecuados, de alimentación y de un abordaje sanitario sobre el barrio infectado. Agreguemos: no se pueden rodear con 300 policías diarios, en tres turnos, los 1.800 asentamientos de la provincia. Un show intimidatorio está en marcha.

En una sintonía similar a la de sus pares cayetanos se encuentran los representantes sindicales de la CGT y de las CTAs, mostrando diferencias en el discurso sobre los recortes salariales a los trabajadores aprobados por la CGT, pero aceptando en la práctica la batería de medidas gubernamentales y patronales contra los trabajadores. En este contexto, las convocatorias motorizadas por las representaciones gremiales clasistas y combativas agrupadas en el Plenario del Sindicalismo Combativo resultan fundamentales para organizarse contra la arbitrariedad patronal y gubernamental.

Los editorialistas macristas se rasgan las vestiduras por los pobres, anticipan una movida por parte de la Corte Suprema para interferir en los criterios de manejo de la cuarentena y se quejan amargamente por “las deserciones de los poderes legislativo y judicial (que) dejaron al Ejecutivo con la suma del poder público” (*La Nación*, 27/5, Joaquín Morales Solá). Cuando esa suma del poder público se otorgó en el Congreso para poner al país al servicio del interés de los bonistas y del FMI, o para habilitar la suma de 4.700 millones de dólares al Tesoro para el pago de deuda, ni la queja ni la amargura del macrismo eran tales.

La negación del gobierno respecto de los padecimientos populares y de la angustia en la población, como única forma de sortear el debate, otorga al macrismo un ángulo de explotación demagógica.

Despojo

En simultáneo, de manera menos sonora, se desenvuelve un proceso de despojo de los sectores populares a manos de grandes empresarios y de los bancos y del capital financiero, particularmente en esta etapa en la que el gobierno busca presentarse frente al FMI y a los bonistas ofreciendo recortes jubilatorios y la negativa a afectar a las grandes rentas y fortunas, personales y empresariales, de banqueros y terratenientes, para atender las necesidades populares, en aras de cerrar su negociación por la deuda externa. Apuntemos que el único proyecto presentado hasta ahora es el del FIT, que va a fondo en esa dirección. Mientras Carlos Heller y Máximo Kirchner siguen limando y postergando su proyecto para no alterar el humor de Wall Street.

Lógicamente, la oposición macrista no le reprocha a Alberto Fernández el recule frente a BlackRock y otros poderosos fondos de inversión. Mientras tanto, agita la declaración de “default restringido” o “soft”, para acelerar un arreglo con los bonistas en momentos que la negociación de la deuda se encamina a mayores concesiones con el capital financiero y a sus exigencias para auditar las cuentas argentinas. Blanco sobre negro, el FMI volvió con los Fernández y monitorea desde las sombras toda la negociación y la política económica.

La comisión bicameral de investigación de la deuda contraída exclusivamente en la etapa macrista (2016-2019), que iniciará la investigación de la fuga de capitales, solo se propone un “nunca más”, según acaban de explicitarlo sus integrantes en la sesión constitutiva. No para recuperar los fondos fugados, aunque el propio Banco Central confiese que “las compras realizadas por el 1% de estos agentes o sociedades, es decir unas 850 personas jurídicas, alcanzaron a 41.124 millones de dólares en cuatro años” (*Tiempo Argentino*, 14/5). Eso no ha sido un impedimento ‘para que los mismos grupos económicos y especuladores sigan en la actualidad fugando capitales, que es lo que explica que el dólar haya superado la barrera de los 120 pesos, duplicando el dólar oficial.

Junto con la denuncia de la actual titular de los servicios de inteligencia, Cristina Camaño, por el espionaje de la AFI, estos temas constituyen la piedra angular de la estrategia oficialista para neutralizar al macrismo en su fase actual, alejada de aquellos días en los que el presidente del bloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, llamaba a Alberto Fernández “comandante”.

Vaciamiento de la Anses

Mientras que la asistencia social fue dejada en manos de La Cámpora, la oposición macrista se encuentra atada de pies

y manos para criticar a su pretendido máximo enemigo, debido a que de los dos lados de la grieta se sientan los defensores del vaciamiento de la Anses, de la transformación de las jubilaciones en un ingreso asistencial y de la reducción de los aportes patronales y la asistencia a las empresas y a empresarios... con los fondos de los jubilados. Por eso, la segunda rebaja jubilatoria ejecutada por Alberto Fernández sobre la base incluso de violar la ley del Congreso, que estipulaba para esta etapa la presentación de una nueva fórmula de movilidad, no es objeto de mayores quejas por parte de los escribientes macristas.

“La desaceleración inflacionaria, junto con la brutal caída en la actividad económica, sumados a la baja del salario, la destrucción de empleos, la precarización laboral y la suba de la informalidad, tuvieron impacto. Los aportes y contribuciones cayeron con fuerza y sólo llegan a cubrir el 28,2% de los gastos de la seguridad social”, señala BAE sobre los últimos números de la Anses. Un proceso de vaciamiento que no se podría operar con un mes y días de cuarentena (los datos son de abril), sino por una tendencia -presente desde hace décadas- al desfaldo de sus fondos, que fueron destinados a pagar la deuda y subsidiar a los capitalistas, mientras se efectuaban recortes progresivos de los aportes patronales.

Quién paga la crisis

Frente al escenario de unos 600 mil despidos que se pronostican en el año y un incremento de las rebajas salariales, las luchas de los trabajadores resultan clave para esta etapa. Diferentes sectores del movimiento obrero han tomado la iniciativa. La primera línea de los trabajadores de salud ha denunciado las pésimas condiciones hospitalarias y de sus trabajos; los repartidores se organizan cada vez de forma más extendida contra la precarización; los mineros de Andacollo por sus puestos de trabajo; los obreros del Neumático y gráficos, como Morvillo, han luchado y ganado contra cualquier rebaja salarial; los choferes de colectivos en el interior del país y se movilizan por sus salarios, mientras que los chubutenses siguen en lucha contra el no pago del salario de docentes y estatales, así como los compañeros piqueteros que se organizan en las barriadas contra el hambre y las pésimas condiciones sanitarias.

El “pacto de caballeros” que se teje entre el gobierno y el macrismo en torno del pago de la deuda y al apoyo a las extorsiones del capital financiero nos obliga a desnudar la hipocresía de los altercados políticos para la tribuna y a profundizar el programa y las acciones de los trabajadores y su organización para que la crisis la paguen los capitalistas.

Mineros de Neuquén: balance de una lucha histórica

Después de 17 días de piquetes y acampes termina una etapa de esta extraordinaria lucha y continúa la batalla por los puestos de trabajo.

Los obreros mineros de Andacollo han conquistado el compromiso de la continuidad de los puestos de trabajo en un futuro pliego licitatorio, donde se deberá respetar la antigüedad de los compañeros. Con esta cláusula, cualquier empresa que retome la explotación deberá incorporar a estos trabajadores. Junto con ello, se estipuló un aporte económico de 50.000 pesos (20.000 por marzo y 30.000 por abril) y luego cuatro cuotas de 30.000 en los próximos meses.

Además, se establece una mesa de negociación y monitoreo en forma quincenal, la cual estará compuesta por la plana mayor de los funcionarios de la provincia y donde los representantes de los mineros podrán estar presentes. Sobre el punto de las causas penales, el acto no hace referencia alguna.

Dicho esto, se trata de un triunfo importante si se tiene en cuenta el contexto y las dificultades que presentó la lucha. Por un lado, la realización de una protesta con acampes, ocupación de la mina, de la municipalidad de Andacollo y cortes de ruta en tiempos de pandemia y de cuarentena. Por otro lado, la fuga y retirada de la patronal derivó que todo lo relacionado con el pago de los salarios y las indemnizaciones se tramitara en la justicia, ya que la empresa se presentó en concurso de acreedores. Por esta vía, la empresa busca eximirse de su responsabilidad y pagar indemnizaciones al 50%.

Finalmente, ante la brutalidad de los incumplimientos de la patronal, el Estado se vio obligado a proceder a la rescisión del contrato, hecho que significó que la empresa no pagaría los salarios adeudados en lo inmediato. La complicidad del Estado neuquino con la patronal quedó de manifiesto en que Trident no pagó la caución de un millón de dólares en tres años y adeudó el abono del canon.

La lucha de los compañeros debió soportar el permanente acoso de la Gendarmería Nacional en el pi-



quete de ruta 22 y en sus domicilios, el cerrojo para el ingreso de alimentos en el acampe de ciudad judicial, las amenazas de criminalización por "violación de la cuarentena", soportar fríos y condiciones climáticas intensas.

La población de Neuquén en general desarrolló una solidaridad enorme, expresada en el acercamiento de alimentos o el apoyo en redes sociales. Y en particular, de los pueblos de Andacollo, Huinanco y de la zona Norte que hicieron su aporte con la experiencia de años y años de atropellos por parte de las patronales con los obreros mineros. Vale recordar, que los obreros que se quedaron en la comuna de Andacollo, mantuvieron la ocupación de las instalaciones de la mina.

La definición del conflicto

El temor a una pueblada en Andacollo fue considerada por el gobierno a la hora de ceder, ya que en el mismo día que estaban finalizando las negociaciones, el extinguido de Andacollo, Domingo Colletti, no descartó una revuelta de la comunidad minera.

En este sentido, fue central el papel jugado por las organizaciones de izquierda y sus agrupaciones. Es que, mediante la "multisectorial" contra el ajuste y la represión" y el Plenario Sindical Combativo, se acompañó en cada etapa de la lu-

cha. Por ejemplo, el Polo Obrero y ceramistas cortaron la ruta para exigir al gobierno la resolución positiva del conflicto. Fue importante el rol de los legisladores del Frente de Izquierda donde, por ejemplo, Patricia Jure logró aprobar una declaración de la Cámara por los puestos de trabajo. Nuestro partido se jugó con todo al triunfo de esta lucha, estando en cada instancia decisiva. Nuestros compañeros Fede y Tamara fueron secuestrados por la policía provincial por 12 horas por acompañar esta pelea.

Esta actitud de la izquierda y el clasismo contrastó con el papel lamentable que jugó la dirección de la CTA que no fue capaz de realizar una sola acción concreta para no chocar con el gobierno de Omar Gutiérrez.

Lo que viene

Ahora, con esta importante victoria, se abre una etapa donde el gobierno buscará desactivar la organización minera y dilatar las soluciones. Por lo tanto, la continuidad de las asambleas y de la organización del colectivo obrero es clave para garantizar los puestos de trabajo. Está planteada más que nunca, una salida por la continuidad estatal de la explotación de la mina, bajo gestión de los trabajadores.

César Parra

¡NO AL PACTO UIA-CGT-GOBIERNO! ¡QUE LA CRISIS NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES!

El Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo votó movilizarse a la Plaza de Mayo

Y un plan de lucha en todo el país

El 27 de mayo, en forma virtual, se reunieron más de 300 representantes de sindicatos, seccionales, comisiones directivas y cuerpos de delegados integrantes del Plenario del Sindicalismo Combativo, con la mesa nacional del PSC, situada en la sede de la AGD-UBA.

Entre las organizaciones asistentes se encontraban el Sutna (neumáticos), la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria, Ademys, el Sindicato Ceramista de Neuquén, Suteba Matanza, Suteba Ensenada, directivos de la Cicop, las comisiones internas de Morvillo, Hospital Italiano, ATE-Educación La Plata, ATE-Inti, minorías multicolores de Aten-Neuquén, Agmer-Entre Ríos, el Polo Obrero, ADU-San Luis, minoría del AGTSyP, de Foetra, la CTA-A de Mendoza -encabezada por su secretaria general Raquel Blas-, el Sindicato de Municipales de Jesús María-Córdoba, la Comisión Interna de Textilana, delegados de Siderca y Aluar, secretarios de la Amsafe-Rosario, de la comisión directiva de Sipreba (prensa), delegados de la Salud, ferroviarios del Roca, bancarios, delegados judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores jubilados, entre muchos otros.

También, las principales luchas hoy en curso. En primer lugar, los mineros de Andacollo, Neuquén; los trabajadores del frigorífico Penta; los trabajadores de la Nirva; choferes del Expreso Argentino Neuquén; Textil Iberoamericana; la Multicolor docente de Madryn, también de La Plata; mineros despedidos de Río Turbio; papeleros de Papelera del Plata; compañeros repartidores de las apps; textil Sedamil de Chubut; trabajadores de salud; monotributistas; los concurrentes y residentes médicos de la Ciudad, como parte de más de 25 conflictos obreros de todo el país que se acercaron al Plenario del Sindicalismo Combativo.

Con esta enorme representación, expresión del avance del PSC ante la traición de la CGT y las CTAs, la mesa nacional, integrada por Alejandro Crespo, secretario general del Sutna; Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general de la Seccional Haedo de la UF; Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA; la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola; el secretario general de la Cicop, Guillermo Pacagnini, y la secretaria general del Suteba Matanza, Romina del Plá, dio comienzo al encuentro.



Definiciones y voces del Plenario

Alejandro Crespo abrió las deliberaciones. Caracterizó que en una pandemia que afecta esencialmente a la clase obrera y que pone a la lucha por la salud trabajadora en medio del avance del pico de los contagios como eje central, las patronales están empeñadas en atacar todas las conquistas de los trabajadores. Señaló que la avanzada se expresa en la provincia de Buenos Aires en más de medio millón de despedidos, a pesar del decreto de Alberto Fernández de una supuesta suspensión de las cesantías, un 40 por ciento de los trabajadores suspendidos cobrando salarios reducidos en más de un 25 por ciento y el avance de la precarización laboral. Crespo denunció que esa ofensiva sólo es posible por el pacto de la CGT con la UIA y el gobierno, y sentó el repudio al pacto UIA-CGT-gobierno, EN la necesidad de avanzar en la unificación de las luchas y que la crisis la paguen los capitalistas.

Sobrero destacó las luchas en las que se asienta esa tarea, como Fate, los mineros de Andacollo, los propios ferroviarios del ferrocarril Sarmiento y los conflictos presentes. Guillermo Pacagnini, secretario general de Cicop, destacó el papel del Plenario Sindical Combativo y la justeza del programa que le da sustento, así como la necesidad de luchar por poner en pie una nueva dirección del movimiento obrero.

Ileana Cellotto, secretaria general de AGD-UBA, denunció al gobierno de Alberto Fernández, quien, días previos al comienzo de la cuarentena, eliminó la cláusula gatillo conquistada por el gremio en la paritaria 2019, con la complicidad de la burocracia de las federaciones de la burocracia

de todos los confines del país, representantes de todas las luchas que han puesto a la clase obrera argentina hoy en movimiento contra los despedidos, las suspensiones, reducción del salario y avance del hambre. Mientras, las centrales obreras actúan como pivotes de la UIA y el gobierno para descargar la ofensiva capitalista e imponer una reforma laboral de hecho. Romina focalizó en tres ejes los nuevos pasos del gobierno: la militarización y el aislamiento de los barrios obreros convertidos en guetos, negando alimentación, salud y urbanización; el pago inescrupuloso de la deuda a los usuarios, mientras despotrica contra la fuga de capitales en la era Macri y el avance de la represión contra las cada vez más numerosas luchas obreras, incluyendo el espionaje contra las organizaciones de trabajadores, como el de la Gendarmería contra los mineros de Andacollo, que igual derrotaron al gobierno de la provincia de Neuquén.

Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén, planteó al PSC profundizar la lucha por la defensa de las gestiones obreras, como Zanón, que en todo el país y a escala mundial la burguesía quiere desterrar, aprovechándose de la crisis de la pandemia, y llamó a redoblar la unidad de acción.

Otra voz clave fue la de los trabajadores desocupados. Eduardo "Chiquito" Beliboni, del Polo Obrero, destacó la unidad de trabajadores ocupados y desocupados que denunció la política de profundización del hambre en las barriadas obreras, en las villas como Azul, en la provincia de Buenos Aires, y en todo el país. Desnudo que el gobierno de los Fernández, que hicieron demagogia contra Macri, vació de alimentos a los comedores populares y está convirtiendo en guetos a los barrios más humildes con la militarización.

El cierre estuvo a cargo de Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza. Romina destacó la enorme deliberación obrera, 44 oradores, des-

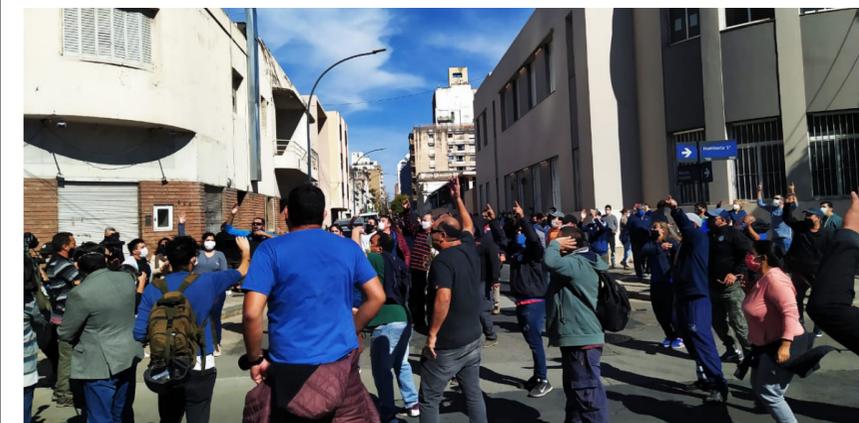
de todos los confines del país, representantes de todas las luchas que han puesto a la clase obrera argentina hoy en movimiento contra los despedidos, las suspensiones, reducción del salario y avance del hambre. Mientras, las centrales obreras actúan como pivotes de la UIA y el gobierno para descargar la ofensiva capitalista e imponer una reforma laboral de hecho. Romina focalizó en tres ejes los nuevos pasos del gobierno: la militarización y el aislamiento de los barrios obreros convertidos en guetos, negando alimentación, salud y urbanización; el pago inescrupuloso de la deuda a los usuarios, mientras despotrica contra la fuga de capitales en la era Macri y el avance de la represión contra las cada vez más numerosas luchas obreras, incluyendo el espionaje contra las organizaciones de trabajadores, como el de la Gendarmería contra los mineros de Andacollo, que igual derrotaron al gobierno de la provincia de Neuquén.

Con esta perspectiva política, el PSC votó un ambicioso plan de acción: jornada de apoyo a la lucha de los trabajadores y jubilados de Córdoba contra el robo jubilatorio del gobernador Schiaretti; apoyo a la jornada del 3J; a la jornada de lucha de los trabajadores de la salud del 10 de junio en la provincia de Buenos Aires; a todas las acciones de las organizaciones sociales piquetes contra el hambre, la militarización, defensa de los comedores populares, extensión del IFE a todos los anotados y seguro de 40.000 pesos, y una jornada nacional de lucha para el 16 de junio, con movilización a la Plaza de Mayo, por una salida obrera para que la crisis la paguen los capitalistas.

Daniel Sierra

Córdoba caliente

En vísperas de un nuevo aniversario del Cordobazo



Este lunes se realizó una masiva caravana con cerca de 4.000 mil autos, de trabajadores de la salud contra la imputación al médico Lucas Figueroa, por el brote de coronavirus en Saldán. La UEPC (docentes) fue al paro virtual el martes, y un plenario de la oposición antiburocrática resolvió y llevó adelante una movilización para hacer activa la iniciativa. La Bancaria decretó el paro con asistencia a los lugares de trabajo el miércoles, en las dependencias afectadas por la reforma jubilatoria. Judiciales resolvió el paro para el 26 y 27 de mayo en momentos de regreso a la actividad, por el aumento salarial y contra el robo a los jubilados. El 27, Luz y Fuerza estableció un quite de colaboración. A último momento se levantó una movilización de trabajadores de UTA, convocada para el martes, ante un pago parcial del salario, aunque sigue el paro.

Los municipales de la capital (Suoen) realizaron este miércoles una enorme movilización de cerca de 3.000 trabajadores, que forma parte de la lucha contra el recorte salarial del 15% y el ataque a otros derechos. El jueves 28 de mayo, el combativo sindicato de la salud, UTSS, está convocando a una jornada provincial de lucha por aumento salarial de emergencia, contra el recorte de las jubilaciones y en solidaridad con Figueroa. En Jesús María, el combativo Sitram discute contra el robo jubilatorio del gobernador Schiaretti; apoyo a la jornada del 3J; a la jornada de lucha de los trabajadores de la salud del 10 de junio en la provincia de Buenos Aires; a todas las acciones de las organizaciones sociales piquetes contra el hambre, la militarización, defensa de los comedores populares, extensión del IFE a todos los anotados y seguro de 40.000 pesos, y una jornada nacional de lucha para el 16 de junio, con movilización a la Plaza de Mayo, por una salida obrera para que la crisis la paguen los capitalistas.

Con esta perspectiva política, el PSC votó un ambicioso plan de acción: jornada de apoyo a la lucha de los trabajadores y jubilados de Córdoba contra el robo jubilatorio del gobernador Schiaretti; apoyo a la jornada del 3J; a la jornada de lucha de los trabajadores de la salud del 10 de junio en la provincia de Buenos Aires; a todas las acciones de las organizaciones sociales piquetes contra el hambre, la militarización, defensa de los comedores populares, extensión del IFE a todos los anotados y seguro de 40.000 pesos, y una jornada nacional de lucha para el 16 de junio, con movilización a la Plaza de Mayo, por una salida obrera para que la crisis la paguen los capitalistas.

marco del paro nacional de reparadores.

De esa forma se levanta la clase obrera, y a fuerza de paros y movilizaciones, empieza a intervenir en la crisis, que los capitalistas y sus gobiernos quieren descargar sobre los que viven de su trabajo, sin afectar los grandes negocios de la provincia, siguiendo con el endeudamiento usuario y sin tocar las millonarias fortunas.

El gobierno de Schiaretti ha aprovechado en forma maliciosa el aislamiento por coronavirus para imponer una agenda histórica antiobrero. Ha quedado claro que la marcha atrás de la flexibilización de la cuarentena fue una manipulación de la vida y la salud de la población, para establecer las condiciones de regimentación social e impedir la movilización contra el robo jubilatorio. Ese accionar no es un caso aislado. Schiaretti, y su Justicia adicta, viene persiguiendo y encarcelando a los que luchan, como sucedió en Jesús María, en UTA, Suoen, Polo Obrero y repartidores.

Córdoba hace tiempo está quebrada. Se mantuvo en los últimos años a cuenta de un endeudamiento exponencial en dólares, que financió grandes negociados de los capitalistas. Ahora, la pandemia ha precipitado la crisis. Para aminorar el impacto de la misma, Schiaretti intentó realizar una emisión de cuasimoneda, lo que solo pudo hacer limitadamente. Ahora, el gobierno se lanzó contra los derechos de las y los trabajadores. Las reformas laboral y previsional de Schiaretti son parte de la agenda del FMI.

Alberto Fernández apoya abiertamente a este gobierno ajustador y represivo. Le aportó los votos del bloque que le responde, el miércoles pasado, para aprobar el robo jubilatorio. Y el sábado, en conferencia nacional, elogió reiteradamente al gobierno de Schiaretti. Se trata de defender una orientación nacional que pasa por pagar la deuda usura-

ria y rescatar al capital, a costa del hambre del pueblo.

La burocracia sindical es cómplice de toda esta agenda antiobrero. Hace tiempo, las conducciones del SEP (estatales) y de UEPC vienen colaborando con el desfinanciamiento de la Caja de jubilaciones, haciendo pasar rebajas de los aportes personales como aumentos salariales, y admitiendo el trabajo precario y la reducción de los aportes patronales. También la burocracia acordó la rebaja salarial, que ahora se quiere generalizar a todos los asalariados. La complicidad en estos ataques se refleja también en el terreno político. En 2019, la gran mayoría de las conducciones burocráticas apoyaron a Schiaretti y Fernández.

Para el Partido Obrero y la CSC, que hemos estado presente en todas las luchas de la provincia, es necesario desarrollar más a fondo un programa de las y los trabajadores. Planteamos: 1) defensa de la Caja de Jubilaciones, terminar con el trabajo precarizado y en negro, reponer aportes patronales, retomar el control mediante un directorio electo y revocable, reponer el 82% móvil; 2) pago inmediato de salarios y estatización del transporte bajo control obrero y de usuarios; 3) no al recorte en los sueldos, aumento salarial y cláusula gatillo; 4) seguro al parado de 30 mil pesos para todos las y los desocupados, y aumento de la asistencia alimentaria; 5) dejar de pagar la deuda usuraria y que se imponga un impuesto a las grandes fortunas.

Con este programa exigimos a las CGT y CTA que convoquen el paro general activo y el plan de lucha, y un congreso de delegados de base de todo el movimiento obrero, para derrotar la avanzada ajustadora y abrir una salida propia en la crisis. Llamamos a las y los trabajadores a participar activamente de la lucha.

Jorge Navarro

Suscribite a **Prensa Obrera.com**

Preparamos un 3J de lucha, por Ni una Menos, el aborto legal y por un Consejo Autónomo de las Mujeres

Nuestra lucha no se toma cuarentena

El próximo 3J, fecha del Ni Una Menos, tendrá lugar en un cuadro excepcional: el agravamiento de situaciones previas que la pandemia y la cuarentena pusieron de manifiesto, muestra los enormes límites de un gobierno que ha elegido hace rato priorizar los intereses del gran capital y el FMI.

El incremento de la violencia, el hambre y la miseria ponen en el orden del día la movilización y el reclamo de las mujeres y las disidencias en este nuevo 3J. Así lo entendimos un amplio arco de organizaciones independientes y de izquierda que, por iniciativa del Plenario de Trabajadoras, pusimos en pie asambleas de un centenar de compañeras para organizar estas jornadas. Estas asambleas -vamos por la tercera este próximo sábado 30 de mayo- se han convertido en una instancia importante de reagrupamiento del activismo de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y un espacio de confluencia con los sindicatos y luchadoras antiburocráticas, como la AGD, Ademys, la Comisión Interna del Inti, entre otras. Del mismo modo, este tipo de iniciativas se están replicando en distintas provincias del país, donde el PdT es un gran promotor de acciones de lucha para estas jornadas.

De estas asambleas ha salido, por ejemplo, la acción que se realiza este 28M, Día de Acción Mundial por la salud de las mujeres, frente al Congreso, reclamando la urgente aprobación del derecho al aborto legal.

El dato político es la defección de las organizaciones kirchneristas, como el Colectivo NUM, que en el pasado organizaban las asambleas, cuando nos enfrentábamos al gobierno de Macri. La integración al gobierno de Alberto Fernández se ha mostrado como un bloqueo para levantar nuestros reclamos, y la independencia política de un movimiento tan vasto y potente, cobra especial centralidad.

Seguir organizadas y movilizadas

Las mujeres, la diversidad y los y las niñas son uno de los eslabones más débiles de la cadena. Las múltiples violencias a las que nos



vemos sometidas en esta pandemia arrancan con la violencia del hambre y la desocupación -como evidencian las ollas populares del Polo Obrero y organizaciones sociales combativas que se movilizan y organizan los reclamos en todo el país, con las mujeres a la cabeza, exigiendo respuestas para miles de personas que atraviesan la pandemia sin recursos.

La IFE, de solo 10.000 pesos, que se cobra una sola vez en ya casi tres meses, ni siquiera la cobraron todos los que lo necesitaban. Los despidos, las rebajas salariales y el aumento de la precarización laboral arrecian para el conjunto de la clase obrera, pero son los frentes donde predomina la presencia femenina donde vemos las consecuencias más graves: trabajadoras de la salud, docentes, empleadas domésticas -entre otras- sufren todo tipo de abusos patronales, con la complicidad de la burocracia sindical y del gobierno que, sin embargo, sí dispuso de fondos y recursos para salvar a los patrones pagando el sueldo de miles de trabajadores y trabajadoras con el fraudulento programa ATP. Lo más impactante de todo es que esos recursos salieron de la Anses, vaciado completamente. El círculo se cierra con el aumento miserable por decreto y que anula el derecho a la movilidad para miles de jubilados y jubiladas que cobran la mínima.

Cumplir la cuarentena sin derechos básicos como la salud y la vivienda digna es una imposición de este gobierno, que las mujeres de los barrios más pobres hemos salido a denunciar. El reclamo de justicia por Ramona Medina, que murió de coronavirus hace dos semanas, luego de mostrar las terribles condiciones en las que se atravesaba el "aislamiento" en la Villa 31, será una de las banderas destacadas de este nuevo Ni Una Menos.

El aborto legal no puede esperar más

El gobierno está usando la pandemia para cajonear esta reivindicación histórica del movimiento de mujeres. El tan prometido proyecto propio del Ejecutivo sigue sin aparecer y tampoco se habilita el tratamiento del proyecto de la Campaña Nacional, por el que se movilizó masivamente la ola verde en todo el país. Esquivan el debate y posponen una votación, que si el Ejecutivo estuviera dispuesto a que salga, podría hacerse sin problemas. Esto es motivo de festejo para el clero, que mientras tanto sigue impidiendo -con anuencia del Ministerio de Educación- que se imparta la educación sexual laica y científica en las escuelas y sobre el cual el gobierno sigue descargando la tercerización de la asistencia social, a cambio de apoyo político,

y que los curas y pastores ejerzan un control político en los barrios.

Los femicidios no se tomaron cuarentena

Por otro lado, la violencia en el ámbito del hogar recrudesció en el último período, a tal punto que nos encontramos con un femicidio cada 26 horas, cifras muy parecidas a aquel 2015 del primer Ni Una Menos. Como respuesta a esta escalada de violencia, el Ministerio de las Mujeres ha respondido con negacionismo y sin destinar un peso a la asistencia y protección de las mujeres víctimas. No pueden ofrecerle ninguna salida a las víctimas de violencia porque han decidido bajar esas banderas para defender a un gobierno que le paga millones de dólares a bonistas usureros, en lugar de invertir en infraestructura y recursos para ayudar a las mujeres que atraviesan el flagelo de golpes y abusos en sus propias casas. Lo que tenemos es una brutal precarización laboral de las trabajadoras de la Línea 144 y ninguna medida para garantizar más y mejores casas refugio -una verdadera urgencia para combatir esta pandemia. Mientras tanto, las comisarías siguen sin tomar las denuncias a tiempo y la Justicia sigue perdiendo a las mujeres en el laberinto de trámites burocráticos, que se abandonan antes de conseguir la perimetral, la exclusión o el botón antipánico.

Por un Consejo Autónomo de las Mujeres

La creación de un Ministerio de "las mujeres y la diversidad" se ha revelado rápidamente (como en pasado sucedió con el Consejo de la Mujer o el Inam macrista) como una maniobra distraccionista y de cooptación de las flamantes nuevas funcionarias. Pero en materia de nuestros reclamos: nada. La conquista de nuestros derechos, y una mejora en las condiciones de vida de las mujeres y las diversidades, no vendrá de la mano de oficinas estatales atadas a la orientación política de los distintos gobiernos -que siguen priorizando una Argentina de sometimiento colonial, lo que implica más ajuste y más violencia.

En contraposición, seguimos luchando por un Consejo Autónomo de las Mujeres, que sea una herramienta de organización política de las mujeres y fortalecimiento de nuestra lucha. Autonomía política frente al Estado y presupuesto para que seamos nosotras mismas las que tomemos en nuestras manos la batalla contra la opresión y la violencia.

Nos sobran razones para volver a gritar Ni una Menos este próximo 3 de junio. La asamblea de este sábado discutirá la organización de una acción callejera frente a Plaza de Mayo, con aislamiento social y todas las medidas necesarias. Al mismo tiempo, coparemos las redes, los balcones y ventanas de nuestras casas exigiendo: basta de femicidios, presupuesto y casas refugios ya; 30.000 pesos de subsidio para todas las desocupadas; comida, agua potable y productos de higiene en todos los barrios; testeos sin dilaciones; blanqueo de las empleadas domésticas; ESI laica en todos los niveles educativos; aborto legal sin demoras; producción propia de misoprostol y de mifeprestona; separación de las iglesias del Estado; centralización del sistema de salud; no al pago de la deuda externa usuraria, ilegítima y fraudulenta. ¡Ni una Menos. El Estado es responsable!

Rosalía Rodas
y Juliana Cabrera

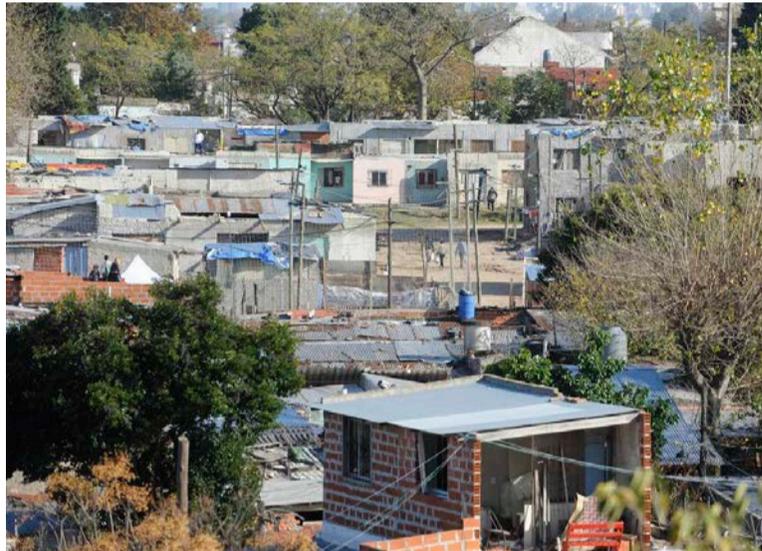
Villa Azul no es excepción: los barrios carenciados del conurbano frente al Covid-19

El brote de Covid-19 en la bonaerense Villa Azul (Quilmes-Avellaneda), con 174 casos confirmados, ha sido respondido por los gobiernos nacional, provincial y locales con el despliegue de un cerco represivo sobre sus habitantes.

Rápidamente, la atención "localizada" que anunciase el presidente Fernández este sábado se revela como lo que es, sin eufemismos: el armado de verdaderos guetos contra los pobladores de barrios carenciados, sin la resolución de ninguno de los problemas que llevaron a esta crisis sanitaria. El plan ya había sido puesto en marcha por el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, con el eufemismo de una (imposible) "cuarentena comunitaria", y es ratificado ahora por el viceministro de Salud provincial, que señala que "esto puede ser lo que se venga. Aislamientos estrictos en los territorios comprometidos".

Lo cierto es que el brote de Villa Azul es el emergente de una crisis de subsistencia, habitacional, sanitaria y de infraestructura que se extiende a todos los barrios carenciados del conurbano, y que -como advirtieran tempranamente las organizaciones de lucha- llevan a la pandemia a instalarse allí sin obstáculos. Y cuya falta de solución por parte de los gobiernos convierte en una condena a muerte, que se agrava por el estado de sitio.

El panorama fue descripto puntualmente en el Informe especial



sobre los barrios populares del conurbano bonaerense ante el coronavirus, elaborado por Marcelo Mache días atrás para *Prensa Obrera*, sobre la base de estadísticas oficiales, entrevistas y relevamientos realizados por el Polo Obrero.

El informe recoge la existencia de 981 barrios en estas condiciones en el conurbano, con 328.393 familias para quienes rige la exorbitante crisis de infraestructura general: una estadística nacional releva que el 68% de los habitantes de asentamientos de este tipo en el país no accede formalmente a energía eléctrica, mientras que la falta de red de cloacas y de acceso formal al gas natural alcanza prácticamente a la totalidad (98 y 99%, respectivamente). Un poderoso

aliciente para el Covid-19 es que el 89% no accede al servicio de agua corriente, llevando a métodos de abastecimiento precarios e incluso al consumo de agua contaminada. Las edificaciones precarias son la regla, con suelos contaminados y frío en el invierno, que golpean las defensas.

Los operativos frente al Covid-19 publicitados por los gobiernos son denunciados como una puesta en escena. Consisten en encuestas, realizadas en buena medida por voluntarios a falta de personal designado, y solo se hacen hisopados a quienes tengan síntomas, sin siquiera testear a quienes hayan tenido contacto con ellos. Pero ello solo donde se hacen, que es una reducida parte de los barrios. En-

tre las denuncias sobre el punto se encuentran las de vecinos matanceros de los sitios carenciados de González Catán, Laferrere e Isidro Casanova, donde los testeos brillan por su ausencia pese a haber decenas de casos. Las constataciones tampoco llevan a mucho: así se vio en el barrio San Ignacio de José C. Paz, donde el registro de dos casos no llevó a desinfecciones ni otras acciones de los municipios. Pasan los operativos, pero todo igual, y ni siquiera aparecen los kits de higiene para los vecinos.

Dentro del conurbano, los distritos con más barrios carenciados son Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, Lanús y San Martín. Se trata de localidades ya densamente pobladas, en que el aumento de los alquileres, las caídas salariales y el mayor desempleo empujan hacia allí a más y más pobladores. El hacinamiento es particularmente fuerte en aquellos del primer cordón del conurbano, lo que hace la realización de cuarentenas familiares particularmente difícil, más teniendo en cuenta que los adultos deben salir a realizar compras o cobrar prestaciones sociales en el caso de quienes las reciben.

Pero, en verdad, esta imposibilidad afecta al conjunto de los habitantes que, sin ayuda del Estado -muchos quedaron fuera del ya mísero Ingreso Familiar de Emergencia, y los que están inscriptos en su mayoría no lo han cobrado-, se

ven obligados a salir a proveerse su subsistencia.

En el mismo sentido, la apertura de ciertas actividades económicas también ha llevado a una mayor circulación de la enfermedad en los barrios. Las violaciones empresarias a los protocolos sanitarios golpean, como se vio en el caso del Frigorífico Federal, que creó un foco de infección en el barrio La Paz de Quilmes.

El señalamiento de tres integrantes del comedor de barrio Unión de La Matanza, de que el hambre crece, vale como panorama general. Los comedores tienen más demanda, pero las provisiones estatales de mercadería han mermado y en muchos casos directamente se han paralizado, lo que el gobierno busca justificar en sus propios escándalos de sobrepagos, y en la supuesta "imposibilidad" de imponer límites a los precios de los proveedores.

Los sucesivos gobiernos del PJ y Cambiemos, a nivel local, provincial y nacional, se revelan en este colapso como lo que son: defensores de intereses completamente ajenos a la población trabajadora. El reclamo por alimentos, subsidios a desocupados y un plan sanitario integral, sobre la base de nacionalizar el sistema de salud y ponerlo bajo control de sus trabajadores y usuarios, va de la mano con el rechazo a sus patrullas.

Redacción

INTERNACIONALES

El sábado 23 se llevó a cabo el Facebook Live sobre "el movimiento obrero internacional frente a la pandemia y la crisis", con la participación de Alejandro Crespo, secretario general del Sutna y dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista-PO; Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNT-MMSP); Robson Silva, director jurídico de la Federación Nacional de Trabajadores de Correos (Fentect) de Brasil y presidente del sindicato de Trabajadores de Correos de Minas Gerais (Sintect-MG), además de dirigente de Luta Pelo Socialismo (LPS); y María Pereira, militante de la CGT Correos de París 11 y dirigente de la organización L'Etincelle de Francia (La Chispa). El evento fue coordinado por Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y dirigente de la CSC-PO.

El movimiento obrero internacional debate el impacto de la pandemia

En su intervención, Crespo se refirió a la emblemática lucha que ha dado el Sutna en defensa del salario y de las condiciones de seguridad e higiene, en el cuadro de pandemia. En relación con la cuestión salarial mencionó que la rápida respuesta del sindicato logró que las empresas Pirelli y Bridgestone acordaran el pago al 100% de los haberes. En el caso de Fate, una serie de medidas de lucha derrotaron el propósito de la patronal de rebajar los sueldos, logrando también el pago al 100%, en un contexto marcado por las reducciones salariales que posibilita el acuerdo de la UIA, la CGT y el gobierno. La defensa del salario aparece estrictamente relacionada con el problema sanitario. Al asegurarse la totalidad del sueldo, los trabajado-

res no se encuentran presionados a concurrir a su puesto de trabajo a cualquier costo.

Crespo valoró la importancia de la recuperación de los sindicatos y su independencia frente a los gobiernos de turno. "La defensa de los intereses de los trabajadores, más allá del gobierno que esté, se denomina neoliberal o popular", resumió.

Jorge Juárez brindó un panorama de la situación de los mineros peruanos. Hay aproximadamente 200 mil trabajadores, un 70% de los cuales se encuentra tercerizado. Juárez denunció que el gobierno de Martín Vizcarra permitió a las mineras seguir operando, pese a que no se trata de una actividad esencial. Y denunció que, en materia de seguridad e higiene, "no se

están dando las garantías a los trabajadores mineros". Hay más de 800 mineros infectados. Las mineras financian las campañas electorales de los grandes partidos.

María Pereira brindó un exhaustivo panorama del movimiento obrero francés, señalando que más de 550 mil personas han perdido sus puestos de trabajo en los últimos dos meses. El sector más precarizado de la clase trabajadora es también el más golpeado por las cesantías. Denunció que "una ola de despidos está siendo preparada por los principales grupos capitalistas de Francia". María destacó también la lucha contra la reforma previsional, que "mantuvo al gobierno (de Emmanuel Macron) en jaque durante casi tres meses" y lo obligó a aplazar

la medida. "El descontento (obrero) sigue, pero confinado" por la pandemia, remató.

Robson Silva denunció la política de militarización del gobierno de Jair Bolsonaro y la agenda de ataque contra las masas. Planteó la consigna "Fuera Bolsonaro y su gobierno: por un gobierno de los trabajadores de la ciudad y del campo". Llamó a la CUT a desarrollar la huelga general y planteó un frente único de la izquierda. Cuestionó también la política de las centrales sindicales, que invitaron al acto del 1º de Mayo al antiobrero expresidente Fernando Henrique Cardoso. Y la política de "frente amplio" hacia sectores de la derecha.

Ileana Celotto planteó, en unas palabras finales, que "esta iniciativa ha sido un aporte a la pelea por la independencia de los sindicatos, en el marco de la lucha de la independencia política de la clase obrera".

Redacción

EUROPA

De la crisis a las nacionalizaciones

La Unión Europea abre las puertas a una suerte de nacionalización generalizada de empresas en apuros, grandes y pequeñas, coticen o no en la bolsa. El Estado pasaría a tener una participación en el capital de las empresas.

Estamos frente a un giro respecto de la política que la Comisión Europea venía sosteniendo, que se circunscribía a facilitar las actuaciones de los Estados miembros a la hora de garantizar liquidez a las empresas (esencialmente mediante avales públicos a préstamos); conceder subsidios salariales; suspender o aplazar el pago de impuestos, u otorgar ayudas directas a los consumidores por los servicios cancelados a raíz de las medidas de cuarentena.

Lo que explica este cambio es que el colapso ha terminado por superar holgadamente los primeros pronósticos. Estamos frente a una insolvencia de las empresas que se viene extendiendo con una velocidad sin precedentes y plantea la amenaza de una quiebra en cadena.

Una de las cosas que no puede pasar desapercibida es que quienes vienen motorizando este nuevo esquema son las naciones líderes, empezando por Alemania y Francia. Esto nos da una medida del alcance del derrumbe de la economía europea y -agregamos mundial- que están ingresando en una depresión, sólo comparable con el crack del '29. La crisis financiera de 2008 fue severa pero no llegó tan lejos y afectó especialmente al eslabón más débil de la economía europea. Ahora ha estremecido a las principales economías del continente y está en juego la sobrevivencia de corporaciones estratégicas.

Este proceso de salvataje ya ha comenzado sin esperar la aprobación de la nueva normativa. Italia, junto a España, uno de los dos países europeos más castigados por la pandemia, ya anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia.

El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, lo llamó "bazuca": 200.000 millones de euros en garantías del Estado que el banco público KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau -Instituto de Crédito para la Reconstrucción) ha puesto a disposición de las empresas en crisis por culpa del coronavirus, más otros 400.000 millones en avales. Adió al *schwarze null* (rigor fiscal): Alemania ha dispuesto un programa de liquidez garantizada de hasta 1.000 millones de euros para cualquier empresa que terminara 2019 sin números rojos pero que haya resultado perjudicada



por el coronavirus. El gobierno de Angela Merkel prevé que soliciten las ayudas unas 100.000 empresas. En cualquier caso, las patronales ya han pedido al Ejecutivo de Berlín que la garantía ascienda al 100% del préstamo e incluso que se les exima de devolverlo. También ha acudido al rescate de dos de las principales marcas de ropa deportiva del planeta, Adidas y Puma.

Por su parte, Francia, que ya es accionista de referencia en empresas clave de diferentes sectores estratégicos, como las energéticas Engie y AA, la teleco Orange, la automovilística Renault o la aerolínea Air France-KLM, ha reiterado que hará lo que sea preciso para salvaguardar a sus empresas más emblemáticas. La expansión de la epidemia no solo hundió en la tormenta a las pequeñas empresas sino también a los grandes grupos. Los gigantes de la industria automovil, Renault y PSA (Peugeot), enfrentan serias dificultades, mientras Air France-KLM suspendieron la casi totalidad de sus actividades. Las capitalizaciones bursátiles sufrieron un serio repliegue y las caídas en las ventas de automóviles registraron niveles de hasta el 80% el mes pasado.

Una tendencia que abre el apetito de ciertos fondos de inversión extranjeros. Aquí mete la cola la guerra comercial, pues se abre el terreno para absorciones hostiles de las empresas europeas por parte de la competencia foránea. Esto incluye la amenaza que viene de las corporaciones norteamericanas, pero también de China. Por lo pronto, los países europeos han comenzado a dar marcha atrás con los compromisos para la instalación del sistema 5G en el continente por parte del gigante asiático. Las nacionalizaciones representan una acción preven-

tiva para neutralizar ese riesgo.

La nueva normativa prevé que las naciones compren las acciones de las empresas en aprietos a precios de mercado, lo cual es engañoso, pues la decisión del Estado implica automáticamente una revaluación del capital corporativo que, sin ese socorro, se hubieran desplomado hasta llegar a precios de remate. El Estado apuntala una valorización ficticia de empresas con una inyección de fondos públicos sideral que es el que se sustrae y se niega a la hora de hacer frente en todos los planos la crisis sanitaria, económica y social. Si se examinan las ayudas que se han puesto en marcha, se advierte que los recursos destinados a la población más afectada (asalariados, precarizados, autónomos y cuentapropistas que están privados de ingresos a partir de la extensión de la pandemia) son residuales o marginales en relación con los que se aplicaron al salvataje empresarial.

Viene al caso señalar que la emergencia del Estado no es inocua respecto de las condiciones laborales, pues va de la mano con avances en la flexibilización de las condiciones de trabajo e incluso de rebajas salariales. Ni siquiera se garantizan los puestos de trabajo. Las primeras víctimas son los trabajadores contratados y tercerizados, que se extiende, luego, a la planta principal, muchas veces en forma encubierta con retiros voluntarios. No se nos puede escapar que la crisis en curso, potenciada por la pandemia, es utilizada por las patronales europeas para avanzar en una reforma laboral en regla, que empieza, en muchos casos, aplicándose a través de convenios por empresa o gremio.

Esta racionalización es el punto de partida para luego proceder a una reprivatización de las empre-

sas, una vez hecho el saneamiento a medida de las exigencias de los capitalistas. La Comisión Europea ha sido clara que la intervención del Estado sólo va a concretarse a pedido de los accionistas y que dicha participación tiene un alcance transitorio hasta que la situación se normalice y se recupere la empresa. "La Comisión advierte de que la presencia pública en el capital debería ser una opción de 'último recurso' dado su carácter 'altamente distorsionador de la competencia entre empresas'. Bruselas también aboga por una permanencia temporal, lo más corta posible, del Estado como accionista".

Disputas

Pero no todo lo que reluce es oro. En lo que se refiere al nuevo esquema, dista de haber una homogeneidad. Importa señalar que los fondos para este salvataje deben ser puestos por cada nación por cuerda separada.

Esto no es del agrado de España, pues quedaría relegada en la competencia desde el momento que no cuenta con los recursos ni la capacidad financiera de los países más poderosos. España, junto al pelotón de las naciones más frágiles, es partidaria de una respuesta a escala europea. La emisión de eurobonos, o coronabonos, respaldada por un fondo común de la Unión Europea, sin embargo, fue rechazada por Alemania, Holanda y las naciones más sólidas económicamente.

Alemania, Francia e Italia buscan ahora un margen mayor para recapitalizar a sus empresas sin pasar por el filtro de Bruselas, que fija en 100 millones de euros el umbral a partir del cual deben notificarse las inyecciones de capital en empresas individuales. Mientras que gobiernos como el francés defienden un incremento sustancial de ese techo, el Ejecutivo español no solo pide reducirlo aún más, sino también endurecer los requisitos para que las empresas accedan a la recapitalización.

Persiste, por lo tanto, una disputa por los fondos, por más que se pretenda exhibir un consenso y armonía que no existe. Los nuevos anuncios no disipan las violentas tensiones que se viven en el seno de la Unión Europea. Alemania no quiere asumir sobre sus hombros el costo del rescate de las naciones más débiles. No se priva de utilizar la emergencia actual para avanzar en una penetración y colonización mayor de las naciones del sur del continente. Ni qué hablar que estos enfrentamientos echan leña al fuego a las tendencias cada vez

más agudas a la desintegración de la Unión Europea.

Perspectivas

En la crisis de 2008, la asistencia financiera se concentró en los bancos. Ahora el salvataje está dirigido a las empresas industriales y comerciales, pero eso no significa que el sistema financiero quede inmune. Por el contrario, está la amenaza latente de que este último sea arrastrado por el torbellino de la crisis mundial capitalista. Por lo pronto, el primer candidato en la materia podría ser la banca italiana, que cuenta con una elevada cartera de incobrables y morosos, que se ha multiplicado sensiblemente a partir de la pandemia. Por otro lado, la envergadura de la crisis en curso excede la capacidad de los Estados para hacerle frente, con lo cual no se está en condiciones de impedir un escenario de quiebras, aunque se lo está intentando neutralizar. Probablemente, asistamos en breve plazo -y ya está ocurriendo- a un encarecimiento del costo del endeudamiento de los eslabones más débiles de la cadena. El anuncio de la calificadora Moodys de bajarle la calificación a la deuda italiana es un anticipo de lo que se viene. La emisión del Banco Central Europeo no puede ser ilimitada y ya la ayuda de la Unión Europea, como acabamos de describir, dista de ser una canilla libre. Aún así, la emisión del BCE ya es gigantesca, de modo tal que no se podrá evitar una desvalorización del euro, que está llamado a provocar un descalabro en las relaciones económicas internacionales, en la medida que la divisa europea es reconocida como uno de los medios de pago a escala global.

A la política de rescate del capital a expensas de los trabajadores, que se pretende llevar adelante con los fondos públicos, es necesario oponerle las nacionalizaciones sin pago de la banca y de las corporaciones, garantizando la continuidad de su funcionamiento bajo control y gestión de los trabajadores, de modo tal de centralizar el ahorro nacional y los principales recursos y palancas estratégicas de cada país al servicio de las necesidades populares y de las prioridades que plantea la actual emergencia. Un planteo transicional que cobra especial relevancia en la actual coyuntura, como un aspecto de la lucha por la unidad socialista de Europa, a partir de gobiernos de trabajadores en todo el continente.

Pablo Heller